



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	11001333501020160028500
Medio de control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Demandado	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
Asunto	AUTO PARA MEJOR PROVEER

El Despacho procede a dictar auto para mejor proveer en los términos del segundo inciso del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1. La Demanda.

1.1. Fundamentos fácticos.

Se relata en la demanda que la señora Cecilia Prada de Iglesias es titular de una sustitución de una pensión de jubilación que le fuera reconocida con motivo del fallecimiento de su esposo, señor José Rafael Iglesias Guevara (q.e.p.d.) quien fuere el titular de la prestación periódica y que fuere reconocida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL o la Caja), aun cuando el referido titular cumplió con los requisitos de la Ley 100 de 1993 para obtener una pensión de vejez. Se comenta que la pensión se hizo efectiva a partir del **16 de abril de 1994** y la sustitución a partir **del 1° de mayo de 2003**.

Expresa que la Caja, en cumplimiento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se afilió al Sistema General de Pensiones desde el 1° de abril de 1994 al Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante COLPENSIONES o la Administradora) y continuó realizando los aportes en pensión al Sistema General de Pensiones para subrogarse de la obligación de pensionar a sus trabajadores, como es el caso de la señora Cecilia Prada de Iglesias.

Indica la demanda que, para la fecha de reconocimiento de la pensión mencionada, CREMIL no tenía la competencia para conceder pensiones, pues quien debía asumir dicha obligación fue el Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy COLPENSIONES, dada la afiliación de CREMIL al régimen de prima media con prestación definida.

Aduce que CREMIL en la actualidad continúa pagando esa pensión sin tener competencia para hacerlo, lo que a juicio de la parte actora causa un detrimento económico en el presupuesto de la Caja.

Informa que a través de peticiones de 26 de diciembre de 2014 y del 16 de marzo de 2016, en las que se expone que CREMIL ha realizado cotizaciones por el señor José Rafael Iglesias Guevara (q.e.p.d.) desde el 1° de abril de 1994 y a la fecha ha cumplido con los requisitos exigidos por el ISS hoy COLPENSIONES para el reconocimiento pensional, razón por la que ésta última entidad debe asumir el pago de la prestación económica.

Agrega que, a la fecha de la presentación de la demanda, COLPENSIONES no ha dado respuesta a CREMIL, lo que configura un silencio administrativo negativo.

1.2. Pretensiones.

La demandante formuló las siguientes pretensiones y condenas:

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución N°. 930 de 21 de junio de 1994 proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL por medio de la cual se reconoció la pensión vitalicia de jubilación al señor JOSE RAFAEL IGLESIAS GUEVARA (Q.E.P.D.) quien se identificaba con la cédula de ciudadanía N°. 17.003.215 de Bogotá.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución N°. 2053 de 25 de junio de 2003 proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL por medio de la cual se concede la sustitución de la pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de la señora CECILIA PRADA DE IGLESIAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.331.241 de Bogotá.

3. Que se declare la nulidad de los actos fictos o presuntos configurados por el silencio administrativo negativo de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES al no resolver las peticiones que elevó la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares los días 29 de diciembre de 2014 y el 16 de marzo de 2016 encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la señora CECILIA PRADA DE IGLESIAS, quedando agotado en debida forma el procedimiento administrativo y en virtud del cual la mencionada Entidad no efectúa el reconocimiento de la prestación.

4. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de Restablecimiento del Derecho, se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en favor de la señora CECILIA PRADA DE IGLESIAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.331.241 de Bogotá, desde el 01 de mayo de 2003 hasta la fecha de la inclusión en nómina de la Entidad accionada, por encontrarse afiliado al régimen de prima media y por ser ésta la competente de reconocer la prestación económica y no la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.”

1.3. Normas violadas.

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones:

-Constitucionales: artículos 1 y 2.

- Legales: artículo 12 de la Ley 6ª de 1945; 15, 36, 52, 151 de la Ley 100 de 1993; 20 de la Ley 797 de 2003; 5° del Decreto 1068 de 1995.

1.4 Concepto de la violación.

En la demanda se sostiene, en resumen, que los actos administrativos demandados vulneran las anteriores previsiones constitucionales y legales, por cuanto el reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de CREMIL sin tener competencia para ello, va en contravía del interés general que promueve la Constitución, como quiera que se concedió un beneficio económico a un particular en menoscabo de los bienes públicos que podrían ser utilizados para otros fines en favor de la comunidad.

Comenta que, a partir de la entrada en vigor del sistema generales de pensiones, implicaba una afiliación a una administradora de pensiones de todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Cita el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, referido al mecanismo de revisión de providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, como también menciona la sentencia SU-567 de 2015 en la que se describe las características de ese mecanismo. Luego precisa que, por voluntad expresa del legislador, en el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 se indicó que mientras se organizaba el Seguro Social Obligatorio, correspondía al patrono el reconocimiento de las pensiones a favor de los trabajadores. De ello colige que el reconocimiento de la pensión por parte del patrono es transitorio y debe ser asumido hasta cuando el Instituto de Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes.

Indica que en virtud del artículo 52 de la Ley 100 de 1993 –reglamentado por los Decretos Nos. 2527 de 2000 y 3727 de 2003, los trabajadores CREMIL fueron afiliados a una administradora de pensiones desde el 1º de abril de 1994, lo que implicaba la liberación de la entidad en el pago de esa prestación, pues era obligación de la administradora respectiva asumir tal competencia.

En síntesis, sostiene que el reconocimiento pensional constituye un detrimento económico en contra de CREMIL, como quiera que fue efectuado por un órgano sin competencia para ello.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1. COLPENSIONES presentó escrito de oposición a las súplicas de la demanda, pues consideró que carecen de sustento fáctico y legal para que sean acogidas.

Precisó que la entidad a través de la Resolución GNR 194453 de 30 de junio de 2016, denegó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor de la señora Cecilia Prada de Iglesias, por lo que en su entender no se configura el mencionado silencio administrativo negativo.

Informó que, en dicha resolución se concluyó **(i) que la señora Cecilia Prada no se encontraba afiliada a Colpensiones; (ii) que CREMIL no allegó los formularios CLEPB (Decreto 013 de 2001) con el fin de acreditar el tiempo de servicio con la Caja, vale decir a fin de dilucidar el derecho aplicable y los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez y (iii) que las prestaciones reconocidas en el sistema general de pensiones son incompatibles con el reconocimiento de las pensiones de jubilación de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL-. Por lo tanto, resulta improcedente que Colpensiones otorgue la prestación periódica reclamada a la luz de lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política.**

Propuso como excepciones las de *cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado, prescripción y buena fe*.

2.2. La señora Cecilia Prada de Iglesias a pesar de haber sido notificada, guardó silencio.

Para resolver se,

II. CONSIDERA

1. El artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, prevé respecto a las pruebas de oficio lo siguiente:

ARTÍCULO 213. PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.

En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.

2. En este caso, de acuerdo con la posición jurídica asumida por las partes, se hace necesario decretar una prueba de carácter oficioso con el de esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.

Así pues, en los términos del artículo 275 del Código General del Proceso, se requiere al representante o funcionario respectivo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** para que, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, allegue con destino a este proceso un informe suscrito bajo la gravedad del juramento en el que certifique si la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** afilió o no al señor JOSE RAFAEL IGLESIAS GUEVARA (Q.E.P.D.) en el Instituto de Seguro Social y en caso afirmativo, si reporta semanas de cotización a dicha entidad por la mencionada Caja.

Dicha información es relevante en el presente asunto, como quiera que en el expediente digital reposa una presunta relación de cotizaciones efectuadas por CREMIL al ISS a favor del señor JOSE RAFAEL IGLESIAS GUEVARA (Q.E.P.D.) en el periodo comprendido de 1° de agosto de 1995 al 7 de marzo de 2002 (ver folios 56 a 59 del 12HistoriaLaboralyExpedienteAdmInistrativo.pdf), sin que dicha prueba documental se encuentre firmada por el funcionario responsable. No obstante, dicha información aparece reiterada en otro documento visible en otra foliatura (folios 22 a 25 ibidem) pero esta vez aparece con **tachaduras y enmendaduras en la columna de los ciclos de cotización.**

Por su parte, en el archivo *13HistoriaLaboral.pdf* del expediente digital, obra el reporte de semanas cotizadas en pensiones emanado de **COLPENSIONES** en el que, contrario a lo anterior, no aparece cotización efectuada por la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** a nombre del señor JOSE RAFAEL IGLESIAS GUEVARA (Q.E.P.D.).

Por tal razón, se hace necesario que **COLPENSIONES** clarifique si el señor JOSE RAFAEL IGLESIAS GUEVARA (Q.E.P.D.) fue afiliado por la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** a la Administradora de Pensiones y de ser así, cuántas semanas de cotización aparecen reportadas en la historia laboral del mencionado

ciudadano por su trabajo en la mencionada Caja. Para tal fin, es preciso recordar A COLPENSIONES que a las entidades administradoras de pensiones les corresponde un deber de protección y diligencia de los datos consignados en las historias laborales de los afiliados. Por ende, en caso de que inexactitudes en la historia laboral, es deber desplegar las actuaciones pertinentes que conduzcan a la corrección de cualquier información errónea o inexacta.

3. Adviértase a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES que la demora, renuencia o inexactitud injustificada para rendir el informe será sancionada con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

4. Rendido el informe, por Secretaría y sin necesidad de auto que lo ordene, dese traslado a las partes por el término de tres (3) días para los fines previstos en el artículo 277 del Código General del Proceso.

5. Surtido lo anterior, ingrese el expediente al Despacho para resolver lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 97f61da99f7348a2a5ddc96543960488d05e193dcf8509bc89c01a01db2d6ad4

Documento generado en 02/12/2022 10:48:51 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>